



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 69**  
**O R D I N A R I A**  
**LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017**

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del lunes siete de agosto de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número sesenta y ocho ordinaria, celebrada el jueves tres de agosto del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lunes siete de agosto de dos mil diecisiete:





Acción de inconstitucionalidad 79/2015, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de los artículos 4, párrafos primero y tercero, 81, fracción I, y 86 de la Ley Número 583 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial estatal el cuatro de agosto de dos mil quince. En el proyecto formulado por el señor Ministro Eduardo Medina Mora I. se propuso: *“PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se sobresee en la acción respecto de los artículos 58, fracción III y 59, párrafo segundo, de la Constitución Política y 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Veracruz, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 4, párrafos primero, en la porción normativa “improrrogables” y tercero y 81, fracción I, en la porción normativa “El Consejo de la Judicatura podrá dispensar este requisito siempre y cuando exista causa justificada.”, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como, por extensión, la de los artículos 58, fracción III, en la porción normativa “con una antigüedad mínima de cinco años, (...)” y 59, párrafo segundo, en la porción normativa “improrrogables”, de la Constitución Política, ambas del Estado de Veracruz, conforme a lo señalado en el considerando sexto de esta resolución; en la inteligencia de que surtirá efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Veracruz. CUARTO. Tanto el Constituyente como*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*el Congreso del Estado de Veracruz deberán legislar, a efecto de contemplar la posibilidad de ratificación de los magistrados del Poder Judicial Estatal, así como la antigüedad mínima de diez años del título de licenciado en derecho con que debe contarse, como requisito para ocupar dicho cargo; de acuerdo con lo precisado en el considerando sexto de este fallo. QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.*

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno a los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a las normas generales impugnadas, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en favor de los considerandos primero, segundo y cuarto, pero con una diferencia con el tercero, en tanto que el artículo 59, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fue impugnado como una omisión legislativa en cuanto a la condición de improrrogabilidad, mas no respecto de las condiciones de reelección o ratificación de los magistrados designados, lo cual cambiaría las condiciones de temporalidad de la impugnación.

Apuntó asimismo que el punto resolutivo segundo propone sobreseer en la acción respecto de dicho precepto,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

y que, en el punto resolutivo tercero, se está declarando la invalidez —por extensión de efectos— del mismo párrafo segundo, en la porción normativa “improrrogables”, por considerar que no se respetó el artículo 116 constitucional; inconstitucionalidad con la que concordó.

Concluyó que, primero, no se debería sobreseer por este artículo por extemporaneidad, sino admitirlo como un tema de omisión legislativa y, segundo, se debería analizar ese artículo contra lo dispuesto en el precepto 116 constitucional, para arribar a la inconstitucionalidad directa. Adelantó que, en caso de que el Tribunal Pleno no lo determine así, se apartaría de las consideraciones, con un voto.

La señora Ministra Piña Hernández coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz en que el artículo 59, párrafo segundo, tendría que analizarse como una omisión legislativa.

Agregó que la causa de improcedencia por extemporaneidad del artículo 58, fracción III, tendría que analizarse en el fondo de la acción, por lo que no procede el sobreseimiento, además de que en el punto resolutivo segundo se prevé un sobreseimiento respecto de estos artículos y, en diverso punto tercero, se establece una declaratoria de invalidez de los mismos, lo cual implicaría una doble decisión sobre un mismo acto legislativo, que resultaría incongruente. Adelantó que, en caso de no aceptarse su sugerencia, elaboraría un voto.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Pérez Dayán concordó con las sugerencias de los señores Ministros Cossío Díaz y Piña Hernández, y explicó que, de no aceptarse en el considerando de oportunidad, no obstaría para que se declare la invalidez de esos preceptos por extensión. Aclaró que, aun cuando los puntos resolutivos segundo y tercero no supongan una incongruencia con el proyecto, se generaría confusión a quien sólo atienda a dichos puntos resolutivos.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. explicó que esos dos preceptos no se estudian como omisiones legislativas, sino porque sus porciones normativas “improrrogables” resultan contrarias a la Constitución Federal, por lo que se propone su invalidez por extensión en suplencia. Ofreció darles el tratamiento que determine el criterio mayoritario del Tribunal Pleno, sea en el sentido de que, aun cuando hayan sido impugnados extemporáneamente, serán considerados como omisiones legislativas o, como propone el proyecto, analizados en el fondo en suplencia.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó, en principio, de acuerdo con el proyecto porque se ha resuelto de esa manera en precedentes. Estimó que no se trata de una omisión, pues existe determinación expresa del legislador local de la improrrogabilidad, lo cual se torna inconstitucional. Recordó que reiteradamente ha tenido reservas respecto de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que, aun cuando pudiera no ser fundado el tema de la omisión, fue planteado como tal, por lo que el plazo para impugnarla no opera respecto de la oportunidad de la demanda, al ser la omisión de tracto sucesivo. Preciso que podría ser fundada o infundada la omisión legislativa, mas es una cuestión que deberá analizarse en el fondo, es decir, no debe adelantarse un pronunciamiento en el considerando de oportunidad.

La señora Ministra Luna Ramos se expresó de acuerdo con el proyecto. Recapituló no haber estado reiteradamente de acuerdo con las omisiones legislativas, además de que en el párrafo cincuenta de la propuesta se abunda que la impugnación es extemporánea al haberse reformado esos artículos mediante la Ley Número 53, publicada el tres de febrero de dos mil, con lo cual coincidió.

Sugirió determinar que, si bien el concepto de invalidez se esgrimió por omisión legislativa, se trata de una deficiente regulación y, por tanto, el planteamiento es correcto.

El señor Ministro Cossío Díaz observó que el artículo 59, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reza: “Los magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables, y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución”, y que en el concepto de invalidez se argumentó que “El Congreso del Estado no previó en el precepto impugnado la posibilidad de reelección o ratificación de los magistrados del Poder Judicial Local, con





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

lo cual incurrió en una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, ya que la Legislatura Estatal se encuentra obligada, por mandato constitucional, a establecer un mecanismo que permita a dichos funcionarios judiciales contar con esa garantía, a efecto de que, al momento de terminar el período de su cargo, puedan ser evaluados por las autoridades competentes y, en caso de demostrar haberse desempeñado con honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados”.

Consideró que el artículo 116, fracción III, párrafo quinto, constitucional dispone que “Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados”, por lo que resulta peculiar que el proyecto proponga no considerar las normas como una omisión, declarar que es extemporánea su impugnación y, después, invalidarlas por extensión de efectos.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. puntualizó que, si bien la accionante se refirió a una omisión legislativa, de la lectura integral de la demanda se desprende que realmente se combatió la improrrogabilidad, por lo que el proyecto se elaboró en consecuencia. Reiteró su ofrecimiento de ajustar el proyecto a como resuelva la





Sesión Pública Núm. 69

Lunes 7 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

mayoría del Tribunal Pleno pero, en ese momento, lo sostendría en los términos presentados.

El señor Ministro Pardo Rebolledo valoró que la causa de improcedencia por extemporaneidad, respecto de los dos preceptos aludidos y como lo sostiene el proyecto, está plenamente acreditada, en tanto que, si bien la naturaleza de los argumentos es un aspecto de fondo, la causal de improcedencia es de estudio previo, siendo que debe tomarse en consideración la fecha en la que se pretendieron impugnar dichos dispositivos legales.

Sugirió abundar en la circunstancia señalada por la señora Ministra Piña Hernández: tener un punto resolutivo de sobreseimiento de estos preceptos y uno posterior que declara su invalidez, lo que aparentaría contradicción. Al respecto, estimó que la causa de improcedencia aludida, si bien está acreditada, no debería reflejarse en un punto resolutivo de sobreseimiento porque, al final de cuentas, se propone una invalidez extensiva, por lo que es conveniente suprimir el punto resolutivo de sobreseimiento, mas no el estudio de improcedencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando tercero, relativo a la oportunidad, respecto de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos con precisiones en los





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

puntos resolutivos, Franco González Salas con reservas en cuanto a los puntos resolutivos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con salvedades, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales con reservas en cuanto a los puntos resolutivos, por lo que ve a decretar el sobreseimiento respecto del artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra.

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos con precisiones en los puntos resolutivos, Franco González Salas con reservas en cuanto a los puntos resolutivos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con salvedades, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales con reservas en cuanto a los puntos resolutivos, por lo que ve a decretar el sobreseimiento respecto del artículo 59, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Piña Hernández y Pérez Dayán votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a las normas generales impugnadas y a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. presentó el considerando quinto, relativo a las causas de improcedencia. El proyecto propone sobreseer respecto del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en razón de que fue derogado y, por tanto, cesó en sus efectos, de conformidad con los precedentes.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo a las causas de improcedencia, consistente en sobreseer respecto del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. presentó el considerando sexto, relativo al estudio de los conceptos de invalidez.

Modificó el proyecto para agregar la cita del precedente del amparo en revisión 2639/1996, como lo sugirió el señor Ministro Laynez Potisek.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En su parte primera, el proyecto propone declarar la invalidez del artículo 4, párrafo primero, en la porción normativa “improrrogables”, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, en vía de consecuencia, del artículo 59, párrafo segundo, en la porción normativa “improrrogables”, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en razón de que no se prevé la posibilidad de ratificación de los magistrados del Poder Judicial, al disponer categóricamente que durarán en su cargo diez años “improrrogables”, lo cual vulnera la garantía de estabilidad y seguridad en el ejercicio del cargo, que comprende no solamente la fijación de su duración —respecto de lo cual las entidades federativas gozan de una amplia libertad de configuración—, sino también la posibilidad de que sean reelectos al término del período para el cual fueron nombrados, con objeto de que alcancen la inamovilidad. Se indica que, no obstante la anterior declaración de invalidez, no se erradica el vicio de inconstitucionalidad, pues seguiría sin preverse la posibilidad de ratificación de los magistrados, por lo que se propone ordenar al Constituyente y al Congreso locales legislar al respecto, a fin de contemplar esa posibilidad y, en tanto lo hagan, deberá aplicarse directamente el artículo 116, fracción III, párrafo penúltimo, constitucional, entendiéndose garantizada tal posibilidad de ratificación.

En su parte segunda, el proyecto propone declarar la invalidez del artículo 4, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Llave y, en vía de consecuencia, del artículo 58, fracción III, en la porción normativa “con una antigüedad mínima de cinco años”, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que, al prever como requisito contar al día del nombramiento con título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de cinco años, no se atiende al artículo 95, fracción III, constitucional, es decir, contar al día de la designación con título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años. Se indica que, al generarse un vacío normativo por falta de previsión expresa en la Constitución local respecto de la antigüedad del título de licenciado en derecho con que debe contarse como requisito para ser magistrado, el Constituyente estatal deberá legislar a efecto de contemplar la antigüedad mínima de diez años establecida por dicho artículo 95, fracción III, de la Constitución Federal y, en tanto lo haga, deberá aplicarse directamente el artículo 116, fracción III, párrafo tercero, constitucional.

En su parte tercera, el proyecto propone declarar la invalidez del artículo 81, fracción I, en la porción normativa “El Consejo de la Judicatura podrá dispensar este requisito siempre y cuando exista causa justificada”, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en tanto que los juzgados municipales forman parte del Poder Judicial estatal, en los términos de los artículos 55, de la Constitución local, y 2, apartado A, fracción IX, de dicha Ley Orgánica, además de que el artículo 116, fracción III, párrafo cuarto, de la Constitución





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Federal contempla que “Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica”, lo que implica necesariamente que quienes ocupen tales cargos deben contar sin excepción con título de licenciado en derecho, máxime si se toma en consideración que las garantías de independencia judicial no solo se instituyen en beneficio del funcionario, sino —como lo ha resuelto este Tribunal Pleno— fundamentalmente en favor de la sociedad, a la que debe asegurarse el cumplimiento de los principios en materia de impartición de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo que resulta imprescindible que estos jueces municipales cuenten con título de licenciado en derecho y, de este modo, resulta inválido que la norma impugnada permita exceptuar del cumplimiento de este requisito, máxime que quedaría a juicio del Consejo de la Judicatura estatal.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno al considerando sexto, relativo al estudio de los conceptos de invalidez, en su parte primera, alusiva al tema de la improrrogabilidad para ocupar el cargo de magistrado.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Pérez Dayán recordó que este Tribunal Pleno ha interpretado el artículo 116 constitucional en el sentido de que la posibilidad de ratificar en sus cargos a los juzgadores lleva implícita la oportunidad de mantenerlos si no se dan condiciones negativas, aun cuando dicho texto constitucional refiera exclusivamente a la posibilidad de continuar en el cargo mediante ratificación. Por tanto, si una disposición local expresa la imposibilidad de una prórroga, elimina el fundamento esencial de la Constitución Federal y su finalidad, por lo que coincidió con el proyecto, excepto por su párrafo ochenta pues, si bien la extensión de invalidez resulta lógica, debe reservarse al capítulo de efectos.

Señaló que, si bien es indudable que cualquier declaración de invalidez pudiera generar un vacío legislativo, este Tribunal Pleno debe ser cuidadoso en precisar, en su caso, la o las porciones normativas afectadas, a efecto de dar congruencia y sistematicidad a cierta regulación; por ello, parecería difícil ordenar que se legisle, especialmente porque la omisión legislativa debe partir de un mandamiento normativo de orden superior que conmine a las legislaturas de los Estados a ajustar su regulación a una determinación tomada por el Congreso de la Unión o por el Constituyente Federal, no así a partir de un vacío legislativo.

Valoró que, independientemente de lo apuntado en el párrafo ochenta y dos del proyecto, la Constitución Federal es aplicable y, en ese tenor, si establece la posibilidad de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ratificación y la disposición local no lo permite bajo el argumento de la improrrogabilidad, al quedar invalidada ésta, prevalece la Constitución Federal, por lo que pueden prorrogarse los nombramientos de los jueces y magistrados que cumplan con los requisitos, vía ratificación.

La señora Ministra Luna Ramos concordó con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4 impugnado, en la porción normativa respectiva.

Recalcó su observación de que el concepto de invalidez se planteó como una omisión legislativa, siendo en realidad una deficiente regulación, pues no es que el legislador no haya establecido que se pueden ratificar o no los magistrados, sino que determinó que no se pueden ratificar porque los diez años son improrrogables; entonces, resulta ser que se legisló contrario a lo que establece la Constitución Federal.

Coincidió con el señor Ministro Pérez Dayán en cuanto a la orden dada en el párrafo ochenta y dos del proyecto al Congreso local, recordando que reiteradamente se ha apartado de este tipo de órdenes, al considerar que son poderes independientes y que, en todo caso, los órganos legislativos estimarán si legislan o no determinada figura. En el caso, valoró que el problema se subsana declarando la invalidez de la porción normativa propuesta, con lo cual se entendería que esos nombramientos son prorrogables y, por tanto, ratificables.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En cuanto a la propuesta de extensión de invalidez, indicó que queda a criterio del señor Ministro ponente dejarlo en este considerando o colocarlo en uno diverso. No obstante, advirtió que se trata de una invalidez por extensión diferente a las previstas en la tesis correspondiente de esta Suprema Corte, a saber, pues su relación jerárquica-vertical resulta a la inversa, es decir, con la invalidez de una norma local secundaria se pretende invalidar por extensión una constitucional local. Estimó que ese tipo de invalidez nunca se ha ordenado en esta Suprema Corte, mas no significa que no se pueda hacer. En este caso, opinó que la propuesta es correcta, pero se tendrían que esgrimir razones diferentes a las que, hasta el momento, se han dado en función de invalidez por extensión, por ejemplo, que la invalidez extensiva de una norma jerárquicamente superior tiene la finalidad de brindar seguridad jurídica en la regulación concreta.

Propuso precisar —en los efectos— que los magistrados que pudieran ser ratificados, y que estén en el término del período comprendido en la norma impugnada, podrán ser evaluados en términos del artículo 116 constitucional, vía ratificación, pudiendo ser por un período similar, siempre y cuando satisfagan los requisitos establecidos en la ley orgánica.

El señor Ministro Cossío Díaz estimó que, respecto del primer concepto de invalidez, el mismo vicio del artículo 4 impugnado lo tiene el diverso 59, esto es, la falta de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

desarrollo por parte del legislador del conjunto de elementos necesarios para satisfacer las garantías jurisdiccionales del artículo 116, fracción III, constitucional.

En cuanto a la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos de qué hacer con las personas en proceso o a punto de su ratificación, estimó que esta Suprema Corte, ante la falta de garantías jurisdiccionales que se genera con la invalidez de la norma, así como el problema operativo y orgánico de los tribunales que se suscitará en cuanto al artículo 17 constitucional, se debe mantener el párrafo ochenta del proyecto, que contiene una imposición a los legisladores locales para que legislen en el sentido que se propone. Por esa misma razón, valoró que, además, se debería precisar el período de la prórroga para garantizar su función jurisdiccional, considerando que debe dejarse el término de diez años que estableció el propio Congreso local.

En cuanto a la relación jerárquica que debe tomarse en cuenta para la declaración de invalidez por extensión, indicó que debería analizarse, respecto del artículo 59, cuáles son estas condiciones de relación jerárquica de dependencia, en términos del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el caso, apuntó que se va a declarar en vía de consecuencia la invalidez de la Constitución local porque no recreó completamente lo planteado en el artículo 116 de la Constitución Federal.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Aclaró que este criterio podría construirse a partir de las relaciones jerárquicas materiales en sentido horizontal, además de que el asunto no implica un aspecto trivial, como es la estabilidad en el cargo para los magistrados locales. No obstante, opinó que los efectos deberían decidirse al final, no en este momento, para dar oportunidad de reflexionar acerca de las implicaciones de este criterio.

Anunció voto por la inconstitucionalidad del artículo 4 impugnado, sosteniendo la orden legislativa del proyecto, en cuanto a las condiciones del período de la ratificación o de la prórroga.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recordó que existe un precedente relacionado con la legislación de Chihuahua, en el cual se declaró la invalidez de una norma secundaria y se declararon inaplicables ciertos dispositivos de la Constitución local, mas no declarándolos inválidos por extensión.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, obligado por la votación mayoritaria en el considerando tercero, coincidió con el proyecto, partiendo de la premisa de que no hay un argumento de omisión legislativa.

La señora Ministra Piña Hernández se manifestó de acuerdo con el estudio de fondo, y solicitó que la orden de legislar y los efectos se estudien al final, dadas las distintas implicaciones, especialmente por lo que ve a los lineamientos para declarar la invalidez por extensión, en





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

terminos del artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que se trata de una acción de inconstitucionalidad abstracta. Adelantó que no coincidiría con la invalidez por extensión propuesta, tal como ha votado reiteradamente.

El señor Ministro Laynez Potisek coincidió en que la orden al legislador local de corregir el sistema debe formar parte de la sentencia, de conformidad con los artículos 41 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque, si bien se declaró la invalidez de la porción normativa “improrrogables”, no basta la aplicación del artículo 116 constitucional para solventar el problema, puesto que, por ejemplo, el legislador local no previó un régimen de escalonamiento ni aclaró qué sucedería con los magistrados que actualmente ejercen su cargo, lo que advirtió tras una revisión de los artículos transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó de acuerdo con el proyecto, y coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz, en que se alegó omisión legislativa en la demanda; sin embargo, eso no constriñe o sujeta a este Tribunal Pleno a decidir únicamente si fue o no dicha





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

omisión, sino que debe analizar cualquier contradicción de la norma con el texto constitucional federal.

En cuanto a la posibilidad de invalidar por extensión una norma jerárquicamente superior, indicó que se podría construir un criterio interesante, dada la obligación del Tribunal Pleno de perseguir la regularidad del orden jurídico nacional, y recordó el precedente que mencionó el señor Ministro Presidente Aguilar Morales, en el cual se determinó inaplicar una norma superior a la invalidada. Reservó su criterio para cuando se abra la discusión de los efectos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales apuntó que se podría votar en el sentido de estudiar la omisión legislativa o la contravención a la Constitución Federal, para facilitar la construcción del engrose. También coincidió en que los efectos se discutan al final de la resolución.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea respaldó la sugerencia de estudiar la invalidez por extensión en el considerando final de efectos, como se ha realizado en precedentes. Recapituló que hay seis votos en el Tribunal Pleno en el sentido de que existe un tema de omisión legislativa, lo cual lo obliga para el momento en que se analicen los efectos. Adelantó que el hecho de que no sea una omisión legislativa no anula *per se* la posibilidad de ordenar legislar.

Por cuanto hace a la invalidez propuesta, se manifestó totalmente de acuerdo con el proyecto, y se reservaría su





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

pronunciamiento sobre la extensión de invalidez, adelantando que, en principio, es plausible, pero debe elaborarse un razonamiento distinto al tradicionalmente esgrimido, máxime que se trata de un control abstracto de constitucional, el cual representa contar con herramientas más amplias que, por ejemplo, en un juicio de amparo.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena secundó lo expresado por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, dado que este es un control abstracto de constitucionalidad y la ley reglamentaria da un margen amplio para imprimir los efectos que este Tribunal Pleno juzgue necesarios para lograr la constitucionalidad de las normas que se analizan.

El señor Ministro Cossío Díaz anunció que votaría en el sentido de que se trata de una omisión legislativa en contra del artículo 116 constitucional, y concordó en dejar la parte de extensión de invalidez para el considerando de efectos.

La señora Ministra Piña Hernández recordó que ya se votó la extemporaneidad de la impugnación de los artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que ahora tendría que votarse la propuesta de declaración de invalidez del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, al final, analizar los efectos correspondientes.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. recalcó que el proyecto se construyó no sobre una omisión legislativa, sino





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

porque la norma es contraria a lo expresamente establecido en la Constitución Federal. Adelantó que la pertinencia y subsistencia del párrafo ochenta y dos en el engrose se discutirá cuando se estudien los efectos.

Resaltó que, de acuerdo con las tesis de la Novena Época en controversias constitucionales, la invalidez indirecta se puede determinar conforme a un criterio sistemático, es decir, sea del mismo ordenamiento o de otro distinto al invalidado. Hizo énfasis en no entrar al tema de la jerarquía normativa.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de modificar el considerando sexto, para reservar la discusión de la vinculación al legislador y la invalidez en vía de consecuencia para el apartado de efectos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra Luna Ramos sugirió aclarar que, aun cuando se hizo valer en el concepto de invalidez una omisión legislativa, en realidad se trata de una deficiente regulación.

El señor Ministro ponente Medina Mora I. modificó el proyecto con la sugerencia realizada.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando sexto, relativo al estudio de los conceptos de invalidez, en su parte primera, consistente en declarar la invalidez del artículo 4, párrafo primero, en la porción normativa “improrrogables”, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz por razón de omisión legislativa y por la invalidez de todo el párrafo, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández por la invalidez de todo el párrafo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto aclaratorio. Los señores Ministros Cossío Díaz y Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para una próxima sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cincuenta y nueve minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a una sesión privada, tras un receso, así como a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el martes ocho de agosto del año en curso, a la hora de costumbre.





Sesión Pública Núm. 69

Lunes 7 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN